



Bajo el Volcán

ISSN: 8170-5642

bajoelvolcan.buap@gmail.com

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
México

Archila Neira, Mauricio; García, Martha Cecilia
EL CLAROSCURO DE LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA, 1975-2002
Bajo el Volcán, vol. 3, núm. 6, primer semestre, 2003, pp. 93-104
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28600608>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

EL CLAROSCURO DE LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA, 1975-2002

Mauricio Archila Neira
y Martha Cecilia García

RESUMEN

“El claroscuro de la protesta social en Colombia” muestra precisamente las tendencias cruzadas que se observan en la acción social colectiva del país en los últimos 27 años. Se constata que, a pesar de las duras condiciones económicas, políticas y de violencia degradada, los actores sociales siguen recurriendo a la protesta como una forma de presentar sus demandas y de mostrar las precarias condiciones en que viven. Hay cambios significativos en términos de protagonistas, pues disminuye relativamente el peso de sectores obreros y campesinos, mientras aumenta el de pobladores urbanos. También hay modificaciones en los motivos de la protesta, al pasar de demandas materiales a otras más culturales y políticas. Es precisamente esto último un signo interesante de repolitización del mundo social que muestra cómo los sectores subordinados en Colombia distan de estar derrotados.

ABSTRACT

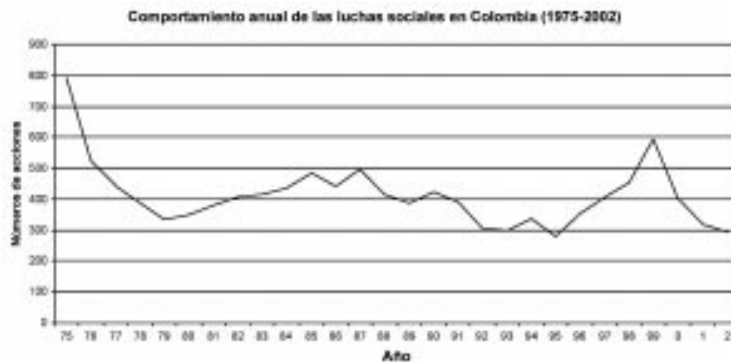
“The lights and shadows of the social protest in Colombia” illustrates precisely the crossed tendencies that can be seen in the collective social action of the country in the last 27 years. In spite of the hard economic and political conditions and the degraded violence, the social actors keep turning to protest as a way to present their demands and show the precarious conditions in which they live. There are significant changes in the protagonists: there is a decline in the relative weight of the workers and peasants, while that of the urban populace increases. There is also a change in the reasons for protest, from material demands to more cultural and political ones. This is an interesting indication of the re-politicisation of the social world which shows that the subordinate sectors in Colombia are far from being defeated.

Una nueva horda nómada, una nueva raza de bárbaros surgirá para invadir y evacuar el imperio [...] El contraimperio debe ser también una nueva visión global, una nueva manera de vivir en el mundo [...] Los nuevos bárbaros [...] trazan nuevas sendas de vida a través de su propia existencia materia.

Michael Hardt y Antonio Negri¹

Colombia, al comienzo del nuevo siglo, parece el país menos propicio para generar las hordas de los “nuevos bárbaros” que pregonan Hardt y Negri. La precariedad de la sociedad civil sometida a fuegos cruzados entre actores armados de diverso signo político, la debilidad de los actores sociales tradicionales y nuevos, y el descenso relativo de una protesta social todavía circunscrita a ámbitos locales, hacen difícil presagiar la irrupción del contraimperio en ese pedazo de geografía suramericana. Sin embargo, aún hay signos de esperanza en sus habitantes que “trazan nuevas sendas de vida” en su experiencia cotidiana. A dicha tensión dedicaremos este ensayo que se divide en tres partes: en la primera describiremos las principales tendencias de las luchas sociales en Colombia en 28 años; en la segunda, realizaremos un análisis de los factores que marcan dichas protestas para, en la tercera sección, abordar una explicación de los cambios observados.

TENDENCIAS DE LAS LUCHAS SOCIALES²



El gráfico que resume en forma agregada la trayectoria anual de las protestas sociales en Colombia, entre 1975 y 2002, enseña varias cosas, unas más evidentes que otras.³ Ante todo resalta que, a pesar de las duras condiciones de violencia, intensificadas en el último decenio, los sectores subalternos colombianos no han cejado en la protesta. En los 28 años considerados se lanzaron 11 587 luchas sociales, con un promedio anual de 414. Es también perceptible que en los últimos dos años las luchas sociales tienden a descender. No es la primera vez que ocurre, como se desprende de la lectura de la trayectoria histórica descrita en la gráfica. Es posible que sea el fin de un ciclo, como pudo suceder entre 1976 y 1979 o entre 1988 y 1995, pero también puede ser signo de un descenso más estructural en los índices de protesta en el país.⁴

Otras enseñanzas no brotan directamente de la gráfica aludida, pero sí reposan en la base de información que la sustenta y que obviamos para hacer legible este ensayo. Nos referimos a la modificación que han sufrido las protestas sociales en Colombia en los últimos años, en términos de sus demandas y sus protagonistas.⁵

En cuanto a los motivos manifiestos de las luchas sociales colombianas de los últimos 28 años se nota un cambio relativo en el peso de las demandas más materiales (tierra, vivienda, salario, empleo, servicios públicos domiciliarios, transporte e infraestructura), en relación a aquellas más políticas y “culturales” (vigencia de los derechos humanos, negociación política del conflicto armado, políticas nacionales y sectoriales, y respeto a las minorías étnicas y a las diferencias de género). Si bien en la trayectoria histórica las primeras siguen totalizando casi dos terceras partes de las protestas, las segundas cobran creciente importancia. Por ejemplo, la petición en torno a la vigencia de los derechos humanos, especialmente de los político-jurídicos, que ocupaba un lugar muy secundario en los años setenta, ha saltado al primer lugar en el orden de demandas en el pasado cuatrienio de Andrés Pastrana (1998-2002). Algo similar puede señalarse de los motivos claramente políticos, como ocurrió en 1999 con las movilizaciones nacionales contra el Plan de Desarrollo de dicho gobierno.

La otra mutación importante gira en torno a los protagonistas de las

luchas sociales en Colombia. La trayectoria histórica, desde los comienzos del siglo XX, muestra el peso cuantitativo de actores más tradicionales como los asalariados, campesinos y estudiantes. A partir de los años ochenta los pobladores urbanos registran crecientemente protestas, especialmente en el ámbito local y regional. En el último cuatrienio sobrepasan a los asalariados en su participación relativa con 34.3% contra 30% respectivamente. Claro, que en términos de número de participantes los asalariados siguen ocupando un lugar destacado, en especial los del sector público (magisterio, trabajadores de la salud y del aparato judicial), quienes desde los años ochenta son los que más adelantan huelgas laborales a pesar de tenerlas legalmente prohibidas.

En este mismo terreno llama la atención la disminución relativa del peso de los campesinos en el total de las protestas. En los últimos años, ellos pasaron de ser el tradicional aliado del proletariado en las luchas sociales a ocupar un lugar secundario en las mismas, por debajo de los estudiantes y casi a la par de los gremios empresariales.⁶

Para resumir esta somera descripción de las luchas sociales en Colombia durante 1975-2002, destacamos una relativa disminución de los promedios anuales de protestas en los dos últimos años, modificaciones importantes en las demandas hacia los temas más políticos y “culturales”, y cambios de protagonismo que hacen más visibles a “nuevos” actores como los pobladores urbanos.

¿CÓMO ENTENDER LOS CAMBIOS RECIENTES?

La literatura internacional sobre movimientos sociales, producida especialmente en los países centrales, tiende a postular una transformación en los repertorios de protesta hacia demandas que se alejan de lo material –entendido como carencias básicas– para incursionar en los terrenos simbólicos y culturales.⁷ Es una forma de insistir en la supuesta superación de la determinación económica de la acción social colectiva. Sin embargo, en países periféricos como Colombia no se puede saltar tan rápido a esas conclusiones.⁸ Nuestra base de datos sobre luchas sociales muestra que aún siguen vigentes muchas demandas materiales. No podría ser de otra

forma en un país que ostenta el segundo lugar en concentración del ingreso en América Latina, después de Brasil. En Colombia hoy la tasa de desempleo abierto raya en el 20% y la línea de pobreza está cerca del 60%, mientras la de indigencia bordea el 25%.⁹ Lo más grave es que la crisis tiende a empeorar en vez de mejorar. Tan dramática situación no la pudo ocultar el hoy presidente Álvaro Uribe Vélez cuando en su programa de gobierno consignó frases como éstas:

El 60% de nuestros compatriotas no tienen cómo adquirir los productos y servicios básicos de la canasta familiar [...] Todos los sectores del país viven en carne propia el empobrecimiento general [...] La distancia entre ricos y pobres ha aumentado [...] Desde 1999, una de cada cinco personas dispuestas a trabajar no encuentran donde emplearse.¹⁰

En esas condiciones no debe extrañar que los colombianos sigan recurriendo a la protesta para denunciar la carencia de condiciones básicas para una existencia digna. Sin embargo, nosotros mismos constatábamos que esas demandas tienen un menor peso con el paso del tiempo. Aquí es donde se debe acudir a otras explicaciones de las reivindicaciones de las protestas; explicaciones que no se distancian de la búsqueda de una existencia digna, comenzando por el respeto a la vida.

La violencia en Colombia con sus múltiples rostros, especialmente a partir de los años noventa, tiene un complejo impacto en la dinámica de la acción social colectiva: por una parte, aniquila a dirigentes y activistas sociales y destruye sus organizaciones; pero, por otra, es motivo de crecientes movilizaciones.

Colombia, sin duda, es uno de los países más violentos del orbe, al menos si nos atenemos a su alta tasa de homicidios que llegó a 78 por 100 000 habitantes en 1992 para descender levemente a 67, cuatro años después.¹¹ La violencia política como tal ha aumentado en los últimos años: en 1988 bordeó los 4 000 asesinatos políticos, para luego oscilar en los 2 500 anuales en los años noventa y finalmente subir, de nuevo, por encima de los 4 000 a partir de 1999.¹² Aunque los números no parecen tan dramáticos son significativos, especialmente por los sectores a

los que se orienta. Según las bases de datos de violaciones de derechos humanos acuñadas por el CINEP, las principales víctimas son los campesinos, seguidos de lejos por los obreros, empleados e indígenas. Lo preocupante es que cada vez la violencia es más selectiva y se dirige contra líderes sociales con el claro objetivo de destruir las organizaciones con más capacidad de presión.¹³

Esta última impresión se refuerza con el aumento geométrico de los éxodos forzados. Para 2001 se contaban 2 200 000 de colombianos desplazados por el conflicto armado, algo más de 5% del total de población del país.¹⁴ Aunque tiende a descender el número de desplazados vinculados a organizaciones sociales, esto refleja precisamente que dichas asociaciones han sido exterminadas o tienen restringida su actividad. Si bien no se puede decir que los éxodos sean una forma de protesta explícita, incluso en el caso de desplazamientos masivos, sin duda reflejan las duras condiciones de violencia que soporta la población, especialmente del campo.¹⁵

Ahora bien, si la violencia desmoviliza, paradójicamente también motiva más protestas, como se vio en la primera sección. Más aún, no siempre se puede afirmar que la violencia sea anómica y destructora del tejido social. Por último, aunque no se puede hablar de la existencia de un sólido movimiento por la paz en el país, hay signos recientes de revitalización de la protesta social por este motivo, como ya se señaló.¹⁶

La lógica reciente de la protesta social en Colombia no se reduce a los efectos ambivalentes de la violencia. Como en otros países de América Latina se siente el impacto del neoliberalismo campeante desde comienzos de los años noventa. En ese marco, la privatización de lo público acelera la recesión de fin de siglo y sustrae cada vez más empleos del mercado laboral. La presión de la banca multilateral y de las multinacionales hacia una mayor apertura económica obra en sentido similar.¹⁷ En esas condiciones no es extraño que disminuya el protagonismo sindical, que cubre el sector formal de la economía y especialmente el público, a favor de los pobladores urbanos; actor social que recoge a gran parte de los desempleados y subempleados.

Otro punto que marca la acción social colectiva, especialmente en el

campo, es la agenda internacional impulsada por los Estados Unidos en el punto de cultivos ilícitos. El abandono de la política de sustitución voluntaria de cultivos y de erradicación manual por la brusca fumigación trae no sólo perniciosas consecuencias para el medio ambiente sino que arruina a los pequeños y medianos cultivadores de coca sin que encuentren salida viable con productos tradicionales. Esto los ha llevado a adelantar masivas protestas, en las que además de denunciar ese giro en el tratamiento de los cultivos ilícitos, reclaman respeto a su condición ciudadana.¹⁸ Ya desde los años ochenta se había dicho que los campesinos colombianos estaban abandonando la demanda exclusiva de tierra, para reclamar condiciones de sostenibilidad de su economía y reivindicar sus derechos ciudadanos.¹⁹

APABULLADOS, MAS NO DERROTADOS

Llegamos así a la hipótesis central en este ensayo: lo que se vive en el mundo social colombiano es una readecuación de la protesta. Ante las condiciones descritas, especialmente la desbordante violencia, no es fácil lanzarse a las calles. No obstante, como se ha observado, la lucha social no desaparece. Lo que hacen los actores sociales es dar una respuesta adecuada a sus necesidades dentro de las condiciones existentes. Podría darse una modificación de los repertorios de la protesta que implique menos confrontación directa, en espera de mejores épocas para lanzarla abiertamente, como ocurrió en varios países de América Latina durante las dictaduras militares. Pero ese paso, además de no ser muy consciente –como suele suceder con la acción humana en la historia–, tiene sus riesgos. Ampliemos estas consideraciones.

Además del generalizado desgaste de las formas tradicionales de protesta –fenómeno que se emparenta con la crisis de las formas convencionales de acción política–, hoy en Colombia se vive una coyuntura particular que no es propicia para practicarlas. Nos referimos al giro autoritario propuesto por el actual mandatario Álvaro Uribe Vélez. Si bien la invocación al uso de la fuerza por parte del Estado contra la insurgencia nunca estuvo ausente en los anteriores gobiernos, existía la puerta abierta de la

negociación política con la guerrilla. Hoy se habla de la derrota militar de ésta como la condición de cualquier diálogo. Lo sorprendente es la acogida entre las capas altas y medias de este discurso guerrillista, las capas que más presencia activa tienen en los escenarios políticos. En ese contexto, la protesta social es tachada de subversiva y prácticamente asimilada a la guerrilla. El riesgo de la penalización de la protesta es cada vez más una realidad cotidiana.

Pero si por los grupos de derecha llueve, por los de izquierda no escampa. Por la dinámica del conflicto armado y errores de táctica, durante años no hubo presencia pública de la izquierda civil. En ese vacío la única voz de izquierda fue la guerrillera, aunque hoy existen dudas si ella realmente se mueve por ideología o por razones más pragmáticas. En cualquier caso, las relaciones entre actores sociales e insurgencia son cada vez más distantes y conflictivas. Aunque sus agendas parecen coincidir, la instrumentalización de las organizaciones sociales en aras de la toma del poder por la vía armada termina perjudicando a los movimientos sociales. En esas condiciones la unidad de la izquierda civil y de los desmovilizados que se vislumbra en torno al Polo Democrático, o a lo que resulte de él, y la búsqueda de una salida política al conflicto armado son luces de esperanza para los subalternos y para la democracia colombiana.

También son esperanzadores los recientes procesos de consolidación de las organizaciones sociales. La mayor confederación sindical, la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), acaba de realizar elecciones democráticas de sus directivas con una participación superior a 55% de los posibles votantes. Esto significa una revitalización de la central con mayor presencia de un sector democrático en detrimento de la izquierda tradicional.²⁰ Los campesinos, a su vez, hacen esfuerzos por lograr la centralización organizativa o, al menos, la unidad de acción de los múltiples grupos en los que están asociados. También es digno de resaltar la convergencia regional que ocurre en varias zonas del país entre actores sociales sindicales, campesinos, indígenas, estudiantes y pobladores urbanos.²¹ Tal es el caso del Cauca, al sur del país, en donde se ha logrado incluso elegir por primera vez un indígena como gobernador de un Departamento, manejado desde tiempos históricos por la elite blanca.

Por último, es conveniente señalar que hay movimientos sociales que acuden a formas diferentes de la protesta abierta para conseguir visibilidad y exigir sus demandas. Tal es el caso del movimiento de mujeres que, en palabras de una de sus voceras, ha sido “la revolución más exitosa en veinte siglos [...] sin un solo muerto [...] una revolución absolutamente pacifista”.²²

CONCLUSIÓN

Los cambios observados en la dinámica reciente de la protesta en Colombia responden a muchos factores, algunos de los cuales los hemos analizado en páginas anteriores. La clave parece estar en la readecuación que los actores sociales hacen de su forma de hacer visibles sus demandas en las condiciones que vive el país y el mundo. Sin embargo, este paso tiene sus riesgos. En particular, los actores sociales pueden aparecer callados y sometidos en un momento en donde habría que contradecir el unanimismo autoritario que impera en el país. Pero esa es la apariencia. Parafraseando a James Scott, al hablar de las armas de los débiles,²³ podemos decir que los sectores subalternos en Colombia no están sometidos ni callados; resisten y se expresan de otra forma.

El error del discurso guerrillista de derecha e izquierda es pensar que los actores sociales son pasivos y, por ende, meros instrumentos de sus respectivos proyectos. Por una parte, utilizar las organizaciones sociales en pos de la lucha armada les resta autonomía y las pone en la mira de los grupos paramilitares. Por otra parte, penalizar la protesta para silenciarla no sólo debilita a la sociedad civil sino que ahoga a la democracia y por esa vía le resta fortaleza al Estado como expresión del ciudadano colectivo.

La protesta es uno de los tantos recursos que disponen los sectores subalternos colombianos para levantar su voz y, sin duda, seguirán acudiendo a ella a pesar de las amenazas que se ciernen sobre ellos. De esa manera, continúan trazando nuevas formas de vivir y hacen parte de las nuevas multitudes que enfrentan a los poderes del presente en muchas partes del mundo.

NOTAS

¹ Michael Hardt y Antonio Negri, *Imperio*, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2002, pp. 192-193.

² La información sobre la que se sustenta esta sección proviene de la Base de Datos sobre Luchas Sociales que ha construido el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) desde 1975. La actualización de esa base de datos contó con el apoyo parcial de COLCIENCIAS. A partir de la lectura de diez periódicos nacionales y regionales, así como de la consulta de diversas fuentes escritas y de la realización de entrevistas a activistas sociales, se hace el registro de las protestas atendiendo a variables como actor social, motivo, lugar y fecha de realización, tipo de lucha, entidad convocante, adversario y resultados. Para una ampliación de las categorías y de la metodología utilizadas véase de los autores el libro de próxima publicación por el CINEP que lleva por título *25 años de luchas sociales en Colombia*, especialmente el Apéndice Metodológico.

³ Por “protesta social” entendemos toda acción social colectiva de más de diez personas que irrumpe temporalmente en espacios públicos para expresar intencionalmente demandas o presionar soluciones ante el Estado en sus distintos niveles o ante entidades privadas. Pueden constituir movimientos sociales si se proyectan orgánicamente en el tiempo, con la salvedad de que hay actores sociales que no recurren a la protesta para lograr visibilidad.

⁴ Este punto toca con una dificultad de fondo para los investigadores consistente en la explicación del comportamiento de los movimientos sociales. En una obra todavía inédita se intentó hacer modelos estadísticos para entender las protestas sociales en Colombia entre 1958 y 1990, sin que se obtuvieran resultados contundentes (Mauricio Archila, *Idas y venidas, vueltas y revueltas*, de próxima publicación). Sin embargo, la irrupción del reformismo estatal aparece en primera instancia como una posible explicación de los auges de las protestas tal como ocurrió en los primeros años de Alfonso López Michelsen –1975-1978–, o durante las negociaciones de paz de Belisario Betancur y la implementación de la reforma política de Virgilio Barco (1982-87). De alguna forma esta argumentación se acerca a lo que Charles Tilly y Sidney Tarrow llaman el peso de la “estructura de oportunidad política” en la dinámica de los movimientos sociales. Véase, por ejemplo, del último autor, *Power in Movement*. Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

⁵ El lector interesado puede contrastar la información disponible para los años 1975-98 en el libro citado (25 años...) con el balance que se hace del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) en el artículo de Álvaro Delgado, Martha Cecilia García y Esmeralda Prada, "Cuatro años bajo la lupa", Cien Días vistos por CINEP, vol. 10, núm. 51, junio-noviembre de 2002, pp. 14-23.

⁶ Los indígenas, que no sobrepasan el 2% de la población total del país, han sido históricamente invisibilizados aun en términos de sus protestas y asumidos como parte del campesinado mestizo por derechas e izquierdas.

⁷ Véase, por ejemplo, Alberto Melucci, *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, México, El Colegio de México, 1999.

⁸ Esta es una aseveración que no se restringe sólo a dichos países. Hardt y Negri, en la obra ya citada, consideran que no es posible entender el Imperio sin considerar la nueva forma de acumulación de capital a nivel global.

⁹ Datos oficiales de un informe técnico del Departamento Nacional de Planeación, elaborado por Edgar Baldión y Esteban Nina ("Coyuntura económica e indicadores sociales", Boletín núm. 30, SUSD-DNP, Bogotá, 2001, pp. 9 y 10).

¹⁰ Tomado de Programa de Gobierno "Mano firme, corazón grande, el camino de la confianza". Claro, que la explicación ofrecida por el entonces candidato ponía la responsabilidad de la crisis económica en los actores armados y en los malos manejos de gobiernos anteriores.

¹¹ Departamento Nacional de Planeación, *Estadísticas Históricas*, vol. I, Bogotá: DNP/Tercer Mundo, 1998, p. 267.

¹² Cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos del CINEP citadas por Mauricio García, "Veinte años buscando una salida negociada", *Controversia*, núm. 179, diciembre, 2001, p. 15. El programa del candidato Uribe Vélez, apoyado en cifras del Ministerio de Defensa Nacional, señalaba que "las muertes como consecuencia del conflicto armado pasaron de 1 770 en 1995 a 3 520 para el año 2000".

¹³ Según la Escuela Nacional Sindical con sede en Medellín, entre el 7 de agosto y el 7 de noviembre de 2002 hubo 113 casos de violaciones de derechos humanos contra sindicalistas, 19 de ellos homicidios. En "98 casos, es decir el 76% del total, se cometieron contra dirigentes sindicales, miembros de juntas directivas y delegados sindicales". Datos aparecidos en Cien Días vistos por CINEP, vol. 10, núm. 51, junio-noviembre de 2002, p. 38.

¹⁴ El inicio del gobierno de Uribe Vélez que prometía seguridad ciudadana no

ha significado una disminución en esa aterradora cifra: entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2002 se calculaban otras 149 387 personas que huyeron para sobrevivir a la degradación del conflicto armado. *Ibid.*, p. 36.

¹⁵ Otra es la idea que sugieren Hardt y Negri al hablar de los éxodos voluntarios de las zonas pobres del imperio a las más ricas. En este caso parece más evidente que “la desertión y el éxodo son una potente forma de la lucha de clases que se da en el seno de la posmodernidad imperial y contra ella”, *Imperio...*, *op. cit.*, p. 192.

¹⁶ Véase de Mauricio Romero: “Movilizaciones por la paz, cooperación y sociedad civil” en Mauricio Archila y Mauricio Pardo (editores), *Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia*, Bogotá, CES/ICANH, 2001, pp. 405-440. El entusiasmo del autor no se vio refrendado por hechos posteriores que volvieron a polarizar el movimiento por la paz al punto de que uno de sus voceros, el empresario y periodista Francisco Santos, es hoy vicepresidente en la fórmula autoritaria de Uribe Vélez.

¹⁷ Es útil el balance de la apertura neoliberal hecho por Gabriel Misas, *La ruptura de los 90: del gradualismo al colapso*, Bogotá, Universidad Nacional, 2002.

¹⁸ Para un análisis de las marchas cocaleras del segundo lustro de los años noventa, véase: María Clemencia Ramírez, *Entre el estado y la guerrilla*, Bogotá, ICANH, 2001.

¹⁹ León Zamosc, “Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia”, *Análisis Político*, núm. 15, abril 1992, pp. 35-66.

²⁰ Norberto Ríos, “Elecciones en la CUT”, *Cultura y Trabajo*, núm. 59, pp. 8-14.

²¹ Sobre estos procesos en el campo colombiano véase el reciente texto de Stephan Suhner, *Resistiendo al olvido*, Bogotá, Taurus/Unrisd, 2001.

²² Florance Thomas, *La Revista de El Espectador*, 4 de marzo de 2001, p. 10.

²³ Véase su libro *Weapons of the Weak*, New Haven, Yale University, 1985.